

Observación general número 6 (los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU*

I. Introducción

1. La población mundial está envejeciendo a un ritmo progresivo verdaderamente espectacular. El número total de personas de 60 años y más pasó de 200 millones en 1950 a 400 millones en 1982 y se calcula que llegará a 600 millones en el año 2001 y a 1.200 millones en el año 2025, en el que más de 70% vivirá en los países que actualmente son países en desarrollo. El número de personas de 80 años y más ha crecido y sigue creciendo a un ritmo aún más acelerado, pasando de 13 millones en 1950 a más de 50 millones en la actualidad, y se calcula que alcanzará 137 millones en el año 2025. Es el grupo de población de crecimiento más rápido en todo el mundo y, según se calcula, se habrá multiplicado por 10 entre 1950 y 2025, mientras que, en el mismo periodo, el número de personas de 60 años y más se habrá multiplicado por seis y la población total por algo más de tres (*Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001: Estrategia práctica*, informe del secretario general [A/47/339], párrafo 5).
2. Estas cifras reflejan la existencia de una revolución silenciosa, pero de imprevisibles consecuencias que ya está afectando, y afectará todavía más en el futuro, a las estructuras económicas y sociales de la sociedad, a escala mundial y en el ámbito interno de los países.
3. La mayoría de los Estados parte en el pacto, en particular los países desarrollados, tienen que enfrentarse con la tarea de adaptar sus políticas sociales y económicas al envejecimiento de sus poblaciones, especialmente en el ámbito de la seguridad social. En los países en vías de desarrollo, la falta o deficiencias de la seguridad social se ven agravadas con la emigración de la población más joven, que debilita el papel tradicional de la familia, principal apoyo para las personas de edad avanzada.

II. Políticas aprobadas internacionalmente en favor de las personas de edad

4. En 1982 la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el *Plan internacional de Viena sobre el envejecimiento*. Este importante documento fue aprobado por la Asamblea General y constituye una guía muy útil al señalar detalladamente las medidas que deben adoptar los

* Décimo tercer periodo de sesiones, 1995.

- Estados miembro para garantizar los derechos de las personas mayores en el ámbito de los derechos proclamados en los pactos de derechos humanos. Contiene 62 recomendaciones, muchas de las cuales están directamente relacionadas con el pacto (*Informe de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento*, Viena, 26 de julio a 6 de agosto de 1982, publicación de las Naciones Unidas).
5. En 1991 la Asamblea General aprobó los *Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad* que, debido a su carácter programático, constituyen también otro importante documento en este contexto (resolución 46/91 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1991 sobre la aplicación del *Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento y actividades conexas*, anexo). Se divide en cinco secciones que se corresponden estrechamente con los derechos reconocidos en el pacto. La “independencia” incluye el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la salud. A estos derechos básicos se añade la oportunidad de realizar un trabajo remunerado y el acceso a la educación y a la formación. Por “participación” se entiende que las personas de edad deben participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones más jóvenes, y que puedan fundar movimientos o formar asociaciones. La sección titulada “cuidados” proclama que las personas de edad deben gozar de atenciones familiares, contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de cuidados o de tratamientos. En lo que se refiere a la “autorrealización”, los *Principios* proclaman que las personas de edad deben aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de sus respectivas sociedades. Por último, la sección titulada “dignidad” proclama que las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones y malos tratos físicos y mentales; que deben ser tratadas con decoro, con independencia de su edad, sexo, raza, etnia, discapacidad, situación económica o cualquier otra condición y ser valoradas cualquiera que sea su contribución económica.
 6. En 1992 la asamblea aprobó ocho objetivos mundiales para el año 2001 y una guía breve para el establecimiento de objetivos nacionales. En diversos aspectos importantes, estos objetivos mundiales sirven para reforzar las obligaciones de los Estados parte en el pacto (*Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001: estrategia práctica* [A/47/339], capítulos III y IV).
 7. También en 1992 y como conmemoración del décimo aniversario de la aprobación del *Plan de acción internacional de Viena* por la Conferencia sobre el Envejecimiento, la Asamblea General adoptó la *Proclamación sobre el envejecimiento*, en la que se instaba a apoyar las iniciativas nacionales sobre el envejecimiento a fin de que se preste apoyo adecuado a las contribuciones, mayormente no reconocidas, que aportan las mujeres de edad a la sociedad y se aliente a los hombres de edad para desarrollar las capacidades sociales, educativas y culturales que no pudieron tal vez desarrollar durante los años en que debían ganarse la vida; se

aliente a todos los miembros de las familias a que presten cuidados, se amplíe la cooperación internacional en el contexto de las estrategias para alcanzar los objetivos mundiales del envejecimiento para el año 2001 y se proclama el año 1999 Año Internacional de las Personas de Edad en reconocimiento de la “mayoría de edad” demográfica de la humanidad (resolución 47/5 de la Asamblea General del 16 de octubre de 1992, *Proclamación sobre el envejecimiento*).

8. Los organismos especializados de las Naciones Unidas, en especial la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también han prestado atención al problema del envejecimiento en sus respectivas esferas de acción.

III. Los derechos de las personas de edad en relación con el *Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales*

9. La terminología utilizada para identificar a las personas de edad es muy variada, incluso en los documentos internacionales: personas mayores, personas de edad avanzada, personas de más edad, tercera edad, ancianos y cuarta edad para los mayores de 80 años. El comité opta por “personas mayores”, término utilizado en las resoluciones 47/5 y 8/98 de la Asamblea General (*older persons*, en inglés, *personnes âgées*, en francés). Estos calificativos comprenden, siguiendo las pautas de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas, a las personas de 60 años y más. (En Eurostat, el servicio estadístico de la Unión Europea, se consideran personas mayores a las de 65 años y más, ya que 65 años es la edad más común de jubilación, con tendencia a retrasarla).
10. El *Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales* no contiene ninguna referencia explícita a los derechos de las personas de edad, excepto en el artículo 9 que dice lo siguiente: “los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social” y en el que de forma implícita se reconoce el derecho a las prestaciones de vejez. Sin embargo, teniendo presente que las disposiciones del pacto se aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, es evidente que las personas de edad tienen derecho a gozar de todos los derechos reconocidos en el pacto. Este criterio se recoge plenamente en el *Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento*. Además, en la medida en que el respeto de los derechos de las personas de edad exige la adopción de medidas especiales, el pacto pide a los Estados parte que procedan en ese sentido al máximo de sus recursos disponibles.
11. Otra cuestión importante es determinar si la discriminación por razones de edad está prohibida por el pacto. Ni en el pacto ni en la *Declaración universal de los derechos humanos* se hace explícitamente referencia a la edad como uno de los factores prohibidos. En vez de considerar que se trata de una exclusión intencional, esta omisión se explica probablemente por el hecho de que, cuando se adoptaron estos instrumentos, el problema del envejecimiento de la población no era tan evidente o tan urgente como en la actualidad.
12. Ahora bien, este hecho no es decisivo puesto que la discriminación basada en “cualquier otra condición social” podría interpretarse en el sentido que se aplica a la edad. El comi-

- té observa que, si bien todavía no es posible llegar a la conclusión de que la discriminación por motivos de edad está en general prohibida por el pacto, las situaciones en que se podría aceptar esta discriminación son muy limitadas. Además, debe ponerse de relieve que el carácter inaceptable de la discriminación contra las personas de edad se subraya en muchos documentos normativos internacionales y se confirma en la legislación de la gran mayoría de los Estados. En algunas de las pocas situaciones en que todavía se tolera esta discriminación, por ejemplo en relación con la edad obligatoria de jubilación o de acceso a la educación terciaria, existe una clara tendencia hacia la eliminación de estos obstáculos. El comité considera que los Estados parte deberían tratar de acelerar esta tendencia en la medida de lo posible.
13. Por consiguiente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de la opinión que los Estados parte en el pacto están obligados a prestar especial atención al fomento y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad. A este respecto, la propia función del comité adquiere más importancia por el hecho de que, a diferencia de otros grupos de población tales como las mujeres y los niños, no existe todavía ninguna convención internacional general relacionada con los derechos de las personas de edad y no hay disposiciones obligatorias respecto de los diversos grupos de principios de las Naciones Unidas en esta materia.
 14. Al finalizar su décimo tercer periodo de sesiones el comité y, anteriormente, su predecesor, el Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales del periodo de sesiones, habían examinado 144 informes iniciales, 70 segundos informes periódicos y 20 informes iniciales y periódicos sobre los artículos combinados 1 a 15. Este examen ha permitido identificar muchos de los problemas que pueden plantearse al aplicar el pacto en un número considerable de Estados parte que representan todas las regiones del mundo, con diferentes sistemas políticos, socioeconómicos y culturales. En los informes examinados hasta la fecha no se han recogido de forma sistemática informaciones sobre la situación de las personas mayores en lo que al cumplimiento del pacto se refiere, salvo la información, más o menos completa, sobre el cumplimiento del artículo 9, relativa al derecho a la seguridad social.
 15. En 1993 el comité dedicó un día de debate general a este problema con el fin de orientar adecuadamente su actividad futura en la materia. Además, en recientes periodos de sesiones ha comenzado a dar mucha más importancia a la información sobre los derechos de las personas mayores y en algunos casos sus debates han permitido obtener una información muy valiosa. Sin embargo, el comité observa que en la gran mayoría de los informes de los Estados parte se sigue haciendo muy poca referencia a esta importante cuestión. Por consiguiente, desea indicar que, en el futuro, insistirá en que en los informes se trate de manera adecuada la situación de las personas mayores en relación con cada uno de los derechos reconocidos en el pacto. Esta observación general determina las cuestiones específicas que son pertinentes a este respecto.

IV. Obligaciones generales de los Estados parte

16. El grupo de las personas de edad es tan heterogéneo y variado como el resto de la población y depende de la situación económica y social del país, de factores demográficos, medioambientales, culturales y laborales y, en el nivel individual, de la situación familiar, el grado de estudios, el medio urbano o rural y la profesión de los trabajadores y los jubilados.
17. Junto a personas de edad que gozan de buena salud y de una aceptable situación económica, existen muchas que carecen de medios económicos suficientes para subsistir, incluso en países desarrollados, y que figuran entre los grupos más vulnerables, marginales y no protegidos. En periodos de recesión y de reestructuración de la economía, las personas de edad corren mayores riesgos. Como ha puesto ya de relieve el comité (*Observación general número 3* [1990], párrafo 12), los Estados parte tienen el deber de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad incluso en momentos de grave escasez de recursos.
18. Los métodos que los Estados parte utilizan para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del pacto respecto de las personas de edad serán fundamentalmente los mismos que los previstos para el cumplimiento de otras obligaciones (véase la *Observación general número 1* [1989]). Incluyen la necesidad de determinar, mediante una vigilancia regular, el carácter y el alcance de los problemas existentes dentro de un Estado, la necesidad de adoptar políticas y programas debidamente concebidos para atender las exigencias, la necesidad de legislar en caso necesario y de eliminar toda legislación discriminatoria, así como la necesidad de adoptar las disposiciones presupuestarias que correspondan o, según convenga, solicitar la cooperación internacional. Respecto de este último requisito, la cooperación internacional, de conformidad con los artículos 22 y 23 del pacto, puede resultar un elemento particularmente importante para que algunos países en desarrollo cumplan las obligaciones contraídas en virtud del pacto.
19. A este respecto, cabe señalar a la atención el “Objetivo mundial número 1”, aprobado por la Asamblea General en 1992, en el que se propugna el establecimiento de infraestructuras nacionales de apoyo para impulsar, en los planes y programas nacionales e internacionales, las políticas y programas relacionados con el envejecimiento. A este respecto, el comité observa que uno de los principios de las Naciones Unidas para las personas de edad que los gobiernos debían incorporar a sus programas nacionales es que las personas de edad deben estar en situación de crear movimientos o asociaciones de personas de edad.

V. Disposiciones específicas del pacto

Artículo 3. Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer

20. A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del pacto en el que se destaca el compromiso de los Estados parte en “asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales”, el comité considera que los Estados parte

deberían prestar atención a las mujeres de edad avanzada que, por haber dedicado toda, o parte de su vida, a cuidar de su familia, sin haber desarrollado una actividad productiva que les haga acreedoras a percibir una pensión de vejez, o que no tengan tampoco derecho a percibir pensiones de viudedad, se encuentren en situaciones críticas de desamparo.

21. Para hacer frente a tales situaciones y cumplir plenamente con lo establecido en el artículo 9 del pacto y en el párrafo 2 h) de la *Proclamación sobre el envejecimiento*, los Estados parte deberían establecer prestaciones de vejez no contributivas, u otras ayudas, para todas las personas sin distinción de sexo que, al cumplir una edad prescrita fijada en la legislación nacional, carezcan de recursos. Por la elevada esperanza de vida de las mujeres y por ser éstas las que, con mayor frecuencia, carecen de pensiones contributivas, serían ellas las principales beneficiarias.

Artículos 6 a 8. Derechos relacionados con el trabajo

22. El artículo 6 del pacto insta a los Estados parte a adoptar las medidas apropiadas para proteger el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Por ello el comité, teniendo en cuenta que los trabajadores mayores que no han alcanzado la edad de jubilación suelen tropezar con dificultades para encontrar y conservar sus puestos de trabajo, destaca la necesidad de adoptar medidas para evitar toda discriminación fundada en la edad en materia de empleo y ocupación (véase la *Recomendación número 162* de la OIT sobre trabajadores de edad, párrafos 3 a 10).
23. El derecho al “goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” proclamado en el artículo 7 del pacto reviste particular relevancia en el entorno laboral de los trabajadores mayores para permitirles trabajar sin riesgos hasta su jubilación. Es aconsejable, en particular, emplear a trabajadores mayores habida cuenta de la experiencia y los conocimientos que poseen (*ibid.*, párrafos 11 a 19).
24. En los años anteriores a la jubilación, deberían ponerse en práctica programas de preparación para hacer frente a esta nueva situación con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados. Tales programas deberían, en particular, proporcionar información sobre sus derechos y obligaciones como pensionistas, posibilidades y condiciones de continuación de una actividad profesional o de emprender actividades con carácter voluntario, medios de combatir los efectos perjudiciales del envejecimiento, facilidades para participar en actividades educativas y culturales y sobre la utilización del tiempo libre (*ibid.*, párrafo 30).
25. Los derechos protegidos en el artículo 8 del pacto, es decir, los derechos sindicales, en particular después de la edad de jubilación, deben ser aplicados a los trabajadores mayores.

Artículo 9. Derecho a la seguridad social

26. El artículo 9 del pacto prevé de manera general que los Estados parte “reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social”, sin precisar la índole ni el nivel de la protección que debe garantizarse. Sin embargo, en el término “seguro social” quedan incluidos de forma implícita todos los riesgos que ocasionen la pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas.
27. De conformidad con el artículo 9 del pacto y con las disposiciones de aplicación de los convenios de la OIT sobre seguridad social –Convenio *número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social* (1952) y *Convenio número 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes* (1967)– los Estados parte deben tomar las medidas adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de seguros de vejez obligatorios, a percibir a partir de una edad determinada prescrita por las legislaciones nacionales.
28. Conforme a lo dispuesto en ambos convenios mencionados de la OIT y en la citada *Recomendación 162*, el comité invita a los Estados parte a fijar la edad de jubilación de manera flexible, de acuerdo con las actividades desempeñadas y la capacidad de las personas de edad avanzada, teniendo también en cuenta factores demográficos, económicos y sociales.
29. Para completar el mandato contenido en el artículo 9 del pacto, los Estados parte deberán garantizar la concesión de prestaciones de sobrevivientes y de orfandad a la muerte del sostén de familia afiliado a la seguridad social o pensionista.
30. Finalmente, para dar pleno cumplimiento al mandato del artículo 9 del pacto, como ya se ha señalado en los párrafos 20 y 22, los Estados parte deberán establecer, dentro de los recursos disponibles, prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas para todas las personas mayores que, al cumplir la edad prescrita fijada en la legislación nacional, por no haber trabajado o no tener cubiertos los periodos mínimos de cotización exigidos no tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de otra ayuda o prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier otra fuente de ingresos.

Artículo 10. Protección a la familia

31. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del pacto y con las recomendaciones números 25 y 29 del *Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento*, los Estados parte deberán desplegar todos los esfuerzos necesarios para apoyar, proteger y fortalecer a las familias y ayudarlas, de acuerdo con los valores culturales de cada sociedad, a atender a sus familiares mayores dependientes o a su cargo. La *Recomendación número 29* alienta a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a que establezcan servicios sociales de apoyo a las familias cuando existan personas mayores dependientes en el hogar y a que apliquen medidas especialmente destinadas a las familias con bajos ingresos que deseen mantener en el hogar a familiares de edad con tales características. Estas ayu-

das deben también otorgarse a las personas que vivan solas y a las parejas de personas mayores que deseen permanecer en sus hogares.

Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado

32. El principio primero de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad que inicia el capítulo correspondiente al derecho a la independencia establece que: “Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia”. El comité estima de gran importancia este principio que reivindica para las personas mayores los derechos contenidos en el artículo 11 del pacto.

33. En las recomendaciones números 19 a 24 del *Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento* se pone de relieve que la vivienda destinada a los ancianos es algo más que un mero albergue y que, además del significado material, tiene un significado psicológico y social que debe tomarse en consideración. Por ello, las políticas nacionales deben contribuir a que las personas de edad permanezcan en sus propios hogares, mientras sea posible, mediante la restauración, desarrollo y mejora de sus viviendas y su adaptación a las posibilidades de acceso y de utilización por parte de las personas de edad (*Recomendación número 19*). La *Recomendación número 20* pone el acento en la necesidad de que en la legislación y en la planificación en materia de desarrollo y reconstrucción urbana se preste especial atención a los problemas de las personas de edad para contribuir a su integración social y, según la *Recomendación número 22*, que se tenga en cuenta la capacidad funcional de los ancianos para facilitarles un entorno adecuado y la movilidad y la comunicación mediante el suministro de medios de transporte adecuados.

Artículo 12. Derecho a la salud física y mental

34. Para hacer efectivo a las personas mayores el derecho al disfrute de un nivel satisfactorio de salud física y mental acorde con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 del pacto, los Estados parte deben tener en cuenta el contenido de las recomendaciones números 1 a 17 del *Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento* que se dedican íntegramente a proporcionar orientaciones sobre la política sanitaria dirigida a preservar la salud de estas personas y comprende una visión integradora, desde la prevención y la rehabilitación hasta la asistencia a los enfermos terminales.

35. Es evidente que no puede abordarse la incidencia, cada vez mayor, de las enfermedades crónico-degenerativas y los elevados costos de hospitalización solamente mediante la medicina curativa. A este respecto, los Estados parte deberían tener presente que mantener la salud hasta la vejez exige inversiones durante todo el ciclo vital de los ciudadanos, básicamente a través de la promoción de estilos de vida saludables (alimentación, ejercicio, eliminación del tabaco y del alcohol, etcétera). La prevención mediante controles periódicos adaptados a las necesidades de las mujeres y de los hombres de edad cumple un papel decisivo, y también la

rehabilitación, conservando la funcionalidad de las personas mayores, con la consiguiente disminución de costos en las inversiones dedicadas a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales.

Artículos 13 a 15. Derecho a la educación y a la cultura

36. El párrafo 1 del artículo 13 del pacto reconoce el derecho de toda persona a la educación. En el caso de las personas mayores este derecho debe contemplarse en dos direcciones distintas y complementarias: a) derecho de las personas de edad a beneficiarse de los programas educativos; y b) aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de las personas mayores en favor de las generaciones más jóvenes.
37. Respecto a la primera, los Estados parte deberían considerar: a) las recomendaciones contenidas en el principio 16 de las Naciones Unidas sobre las personas de edad: “Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de formación adecuados” y, en consecuencia, facilitarles, de acuerdo con su preparación, aptitudes y motivaciones, el acceso a los distintos niveles del ciclo educativo, mediante la adopción de medidas adecuadas para facilitarles la alfabetización, educación permanente, acceso a la universidad, etcétera; y b) la *Recomendación número 47 del Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento* en la que, de acuerdo con el concepto de la UNESCO sobre educación permanente promulgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se recomienda promover programas para personas mayores no estructurados, basados en la comunidad y orientados al esparcimiento, con el fin de desarrollar su sentido de autosuficiencia, así como la responsabilidad de la comunidad respecto de las personas de edad. Estos programas deben contar con el apoyo de los gobiernos nacionales y de las organizaciones internacionales.
38. En lo que se refiere al aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de las personas mayores a que se hace referencia en el capítulo referente a la educación del *Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento* (párrafos 74 y 76), se destaca el importante papel que todavía en la actualidad desempeñan las personas mayores y los ancianos en la mayoría de las sociedades, ya que son los encargados de transmitir la información, conocimientos, tradiciones y valores y que no debe perderse esta importante tradición. Por ello, el comité valora especialmente el mensaje contenido en la *Recomendación número 44* de dicho plan: “Deben establecerse programas de educación en los que las personas de edad sean los maestros y transmisores de conocimientos, cultura y valores espirituales”.
39. En los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 15 del pacto se señala el compromiso de los Estados parte de reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico y de sus aplicaciones. A este respecto, el comité encomienda a los Estados parte que tomen en consideración las recomendaciones contempladas en los *Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad*, en particular el principio 7: “Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar

- activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente su bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes”; y el principio 16: “Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad”.
40. En esta misma línea, la *Recomendación número 48* del *Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento* insta a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a apoyar programas encaminados a lograr un mayor y más fácil acceso físico a instituciones culturales y recreativas (museos, teatros, salas de conciertos, cines, etcétera).
 41. La *Recomendación número 50* pone el acento en la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los propios interesados (es decir, las personas mayores) desplieguen esfuerzos tendentes a superar imágenes estereotipadas negativas que presenten a las personas mayores como personas que padecen problemas físicos y psicológicos, que son incapaces de funcionar independientemente y que no desempeñan ningún papel ni tienen ningún valor para la sociedad. Estos esfuerzos en los que deben colaborar los medios de comunicación y las instituciones educacionales son necesarios e indispensables para lograr una sociedad que abogue por la efectiva integración de las personas mayores.
 42. Finalmente, en lo que se refiere al derecho a gozar del progreso científico y de sus aplicaciones, los Estados parte deberían tener en cuenta las recomendaciones números 60, 61 y 62 del *Plan de acción internacional de Viena* y hacer esfuerzos por promover la investigación en los aspectos biológico, mental y social y las formas de mantener la capacidad funcional y evitar y retrasar la aparición de las enfermedades crónicas y las incapacidades. A este respecto, se recomienda la creación por los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, de instituciones especializadas en la enseñanza de la gerontología, la geriatría y la psicología geriátrica en los países en que no existan dichas instituciones.